

# La gestión de Mena deja sin renta mínima a casi 9.000 familias

El consejero reduce de 32.000 a 23.240 los beneficiarios de la ayuda en 14 meses, aunque pretendía llegar a 18.000 ● Empresa asegura los cobros hasta fin de año

IVANNA VALLESPÍN  
Barcelona

Los beneficiarios de la renta mínima de inserción (RMI) no dejan de bajar cada mes. Si en agosto de 2011 había más de 32.000 expedientes activos de beneficiarios —cada expediente beneficia a una media de 2,5 personas— de esta prestación de último recurso de 420 euros al mes, el año se cerró con 24.765 carpetas y hoy la cifra se ha reducido hasta las 23.240, aunque el objetivo de la Generalitat era llegar a los 18.000. Y ello en un momento en que no deja de aumentar la población en situación de pobreza por la crisis, que ha dejado a una de cada cinco personas y al 25% de menores en riesgo de exclusión social.

Las cifras sobre la RMI las ofreció ayer el consejero de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, que junto al titular de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries, comparecieron ayer en el Parlament para explicar la actual situación de los fondos con los que cuenta la RMI. Algunas versiones apuntaban que de los 100 millones que recogen los presupuestos catalanes, ya se habían gastado 98,5 a finales de septiembre. Mena negó rotundamente que la RMI haya agotado la partida. “El programa tiene recursos suficientes”, aseveró el consejero, quien acusó a la oposición de “irresponsable” por generar inquietud entre los receptores.

Ante la Diputació Permanente del Parlament —órgano de guardia mientras la Cámara catalana está disuelta por las elecciones— y a petición del PSC, ERC e ICV, y con el apoyo del PP, Mena repitió que la dotación de la RMI es de 130 millones de euros. En los presupuestos solo constan 100 millones, pero el consejero aseguró que existe otra partida de 30 millones destinada al programa.

Otras fuentes de la Generalitat apuntan que se trata de una dotación en su origen destinada a políticas de ocupación para beneficiarios de la RMI. Esto significaría que Empresa ha tenido

que echar mano de los fondos para generar empleo para pagar prestaciones de carácter social. Empresa negó este extremo, pero no aclaró de dónde salen los 30 millones adicionales.

Mena también volvió a dejar insatisfecha a la oposición por la retahíla de preguntas sin contestar pese a sus dos horas de comparecencia. El consejero de Empresa empezó su exposición prometiendo “rigor y transparencia” y ofreció cifras sobre la revisión a la que ha sometido CiU al programa de la RMI, endureciendo las condiciones de acceso.

PASA A LA PÁGINA 3

## La oposición obliga a Mas a explicar el rescate de Cataluña en 30 días

PÁGINA 3



MARCEL-LÍ SÀENZ

## El futuro mercado del Ninot crece hacia abajo

Crece hacia abajo. Como todos los mercados municipales que se reforman en Barcelona, el del Ninot, de momento, ha crecido hacia abajo para dar cabida a las plantas del subterráneo. En ellas, además de apar-

camiento, se situarán las infraestructuras del mercado, como las cámaras frigoríficas y el muelle de carga y descarga. El mercado del Ninot es uno de los que debería ver la recta final en el actual mandato, aunque

los trabajos en la estructura se han visto retrasados por la tardanza en las licitaciones de las obras. En el plan de inversiones del Consistorio de 2013 a 2015 está prevista una partida de 18 millones de euros.

# CiU alienta la guerra del comercio

El Gobierno intenta blindarse de la liberalización de horarios con un decreto

DANI CORDERO, Barcelona

Si se conceden pocas treguas en la batalla por el control del comercio, menos habrá en plena precampaña electoral. El Gobierno catalán lo demostró ayer durante su Consell Executiu, en el que aprobó un decreto ley para intentar blindar su política comercial de la supuesta invasión de competencias llegadas de Madrid. El presidente Artur Mas no solo intenta aplacar el real decreto aprobado en julio por el Ministerio de Economía, que amplía el calendario de apertura en festi-

vos y los horarios comerciales; también saca la cabeza para demostrar a la parroquia del pequeño comercio, tradicional caladero de votos de CiU, que se está moviendo en defensa de sus intereses. Y por si algún operador tiene dudas sobre qué decreto es el que manda, el estatal o el autonómico, el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, se limitó a blandir una advertencia: “Los inspectores de la Generalitat no tendrán dudas sobre qué normativa aplicar”.

Lo cierto, no obstante, es que ninguna de las dos Administra-

ciones da su brazo a torcer. Madrid se arroga las competencias en materia de comercio amparándose en la Constitución y Cataluña hace lo propio en virtud del Estatuto. Ajenas a ese debate, las grandes patronales que representan el comercio de proximidad celebraron el paso dado ayer. Incluso desde UGT aplaudían la decisión, pese a detectar “cierto tinte electoralista” en la maniobra. Anged, la patronal de las grandes superficies, de momento calla, la misma opción por la que optaron dos de sus socios, Carrefour y Alcampo, los

primeros hipermercados que decidieron aplicar el decreto estatal al prolongar su horario semanal hasta las 78 horas.

Eso es lo que quiere atajar la Generalitat. En el fondo, el decreto aprobado ayer no hace más que recoger la normativa que ya regía en Cataluña antes de la última convulsión liberalizadora del Gabinete de Mariano Rajoy: limita a ocho festivos anuales en los que el comercio podrá abrir —contra los 10 decretados por el Estado— y a 72 horas semanales de apertura, frente a 90 fijadas por Madrid. PASA A LA PÁGINA 4

## Un concejal de Albiol contrató obras públicas por su cuenta

El escándalo provocado por el concejal David Gómez, elegido en las filas del PP y ahora tráfuga, amenaza con hundir la pretendida imagen de eficacia que Xavier García Albiol quiere imprimir a su gobierno municipal en Badalona. Albiol tuvo que admitir ayer que Gómez ha contratado por su cuenta y sin que lo supiera el Ayuntamiento obras por 700.000 euros. Albiol asegura que llevará a Gómez a la Oficina Antifraude. PÁGINA 3



# La oposición fuerza a Mas a explicar el rescate de Cataluña en el Parlament

El presidente puede demorar la comparecencia hasta después del 25-N

MIQUEL NOGUER  
Barcelona

La solicitud de rescate de la Generalitat al Gobierno central coincidió a finales de agosto con la eclosión del debate soberanista en Cataluña. Esto y el hecho de que se solapara con las vacaciones parlamentarias primero y con la disolución del Parlamento después, han evitado que el presidente catalán haya tenido que explicar ante la Cámara el alcance y las consecuencias del rescate. Finalmente, Mas tendrá que acudir al Parlament, y lo hará forzado por la oposición. Todos los partidos excepto Solidaritat per la Independència se lo exigieron ayer. El presidente, pues, tendrá que comparecer ante la Diputación Permanente en un plazo máximo de 30 días. Esto significa que Mas deberá explicarse, pero podrá escoger si lo hace antes o después de las elecciones del 25 de noviembre.

Cataluña confirmó en julio que se disponía a solicitar dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). La cantidad final solicitada es de 5.433 millones, una cifra que el Gobierno está enviando con cuentagotas para desespero de la Generalitat. Hasta ahora, han llegado a Cataluña 1.039 millones, y el Gobierno de CiU está pendiente de recibir los 500 millones que forman el segundo tramo. Además de pagar a proveedores como las farmacias y las entidades concertadas, el fondo de liquidez también permitirá sufragar el vencimiento de los bonos a particulares en noviembre.

La oposición quiere saber qué tipo de contrapartidas añadidas puede implicar el hecho de acudir al fondo de rescate y cómo está gestionando este dinero la Generalitat. Pero el presidente no es el único forzado a comparecer. También lo hará, y hoy mismo, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell.



Francesc Xavier Mena (izquierda) y Josep Lluís Cleries, ayer en el Parlament. / MARCEL·LÍ SÀENZ

## La oposición carga contra la gestión y la actitud de Mena

VIENE DE LA PÁGINA 1

Con su característico tono condescendiente, Mena explicó que actualmente hay 23.240 expedientes activos, que corresponden a un núcleo familiar. Traducido en personas, hay 62.184 beneficiarios de esta ayuda, lo que significa una caída del 43,6% respecto a los 110.000 de agosto de 2011, cuando Mena revisó el modelo de cobro de la ayuda. Durante este 2012 se han incorporado al programa 7.676 expedientes nuevos, mientras que durante este mismo periodo se han producido 8.624 bajas, el 30% de las cuales porque han encontrado empleo.

Pero Mena no respondió a muchas cuestiones, a pesar de la insistencia de los partidos de izquierda. No reveló cuántas perso-

nas han solicitado la ayuda y todavía no se les ha evaluado. Tampoco cuántas personas que tienen aprobado el expediente no han empezado aún a cobrar. Asimismo, tampoco detalló el motivo de las bajas actuales.

Por su parte, Cleries, se quiso distanciar de toda la polémica y en una corta intervención de apenas un par de minutos decidió esquivar toda responsabilidad en cuanto a la RMI, asegurando que la gestión depende del Departamento de Empresa. “Ustedes me piden que dé explicaciones de un programa que no es de mi competencia”, zanjó. La oposición afeó a Cleries esta actitud.

Los partidos de izquierda criticaron duramente la actitud de Mena. La diputada socialista Eva

Granados le acusó de causar un “colapso enorme”. “Tiene montones de expedientes por evaluar”, que a falta de cifra oficial, Granados eleva a 10.000. El líder de ICV, Joan Herrera, acusó al Gobierno catalán de “insensibilidad social”. “Son fríos ante el sufrimiento”, añadió. Por su parte, Joan Puigcercós (ERC) echó en cara a Mena su “experiencia en escabullirse” de los problemas de la RMI y le recordó que en agosto, en pleno embrollo, tardó tres semanas en dar explicaciones.

Esta no es la primera vez que ambos consejeros comparecen en el Parlament por su gestión de la renta mínima. Ya lo hicieron en agosto de 2011 tras causar una auténtica crisis social con la revisión de la ayuda.

## Albiol asegura que uno de sus concejales contrató obras por su cuenta

JESÚS GARCÍA, Badalona

Accorralado por los escándalos que sacuden el Ayuntamiento, Xavier García Albiol (PP) pasó ayer al contraataque. El alcalde de Badalona anunció que llevará a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) las presuntas irregularidades cometidas por el antiguo edil popular y ahora tráfuga, David Gómez. Hace unos días, un comerciante marroquí del barrio de Sant Roc denunció a Gómez por extorsión. Albiol le apartó de su cargo como concejal de Salud y Servicios Sociales y abrió una investigación interna que ha deparado más sorpresas: el concejal se ha dedicado los últimos meses a “encargar obras por su cuenta”, anunció el alcalde.

El concejal encargó, en nombre del Ayuntamiento, 17 obras a dos empresas de construcción, la mayoría en locales municipales. El Consistorio, subrayó Albiol, no tenía constancia ni ha pagado un euro por los trabajos. Desde septiembre, el Ayuntamiento ha paralizado tres obras en ejecución en locales públicos.

La primera alerta la dieron los vecinos de un local que se quedaron luz por las obras. La Guardia Urbana hizo una inspección y el Ayuntamiento constató que la obra no existía. Al pedir explicaciones, una de las empresas remitió al Consistorio correos electrónicos en los que Gómez solicitaba los trabajos. Estos suman un importe cercano a 700.000 euros, según Albiol.

### Limpieza de un local

Una de las obras es la limpieza de tres viviendas y un local en el número 64 de la carretera de Santa Coloma, lo que, según Albiol, vincula a Gómez con el caso de extorsión. Sería la dirección de una de estas viviendas la que el excoordinador del distrito de Sant Roc Antonio Cortés —también destituido por este caso— habría dado como la de una supuesta vivienda de protección oficial que Cortés ofreció a un comerciante a cambio de dinero. Gómez encargó obras por 25.200 euros en el piso.

Hace más de un año, otra empresa giró al Ayuntamiento siete facturas por importe de 90.000 euros. El alcalde ordenó que se devolvieran sin pagar, ya que tampoco correspondían a ninguna obra encargada o tramitada por el Ayuntamiento. Albiol no descarta llevar la documentación a la fiscalía y acusó al exconcejal de usar su cargo para cometer irregularidades. “Ha sido un intento de estafa que no le ha salido bien”. Gómez negó las acusaciones y animó al alcalde a presentar la denuncia si tiene pruebas.

## El PP exige a Trias que rompa el pacto de su hoja de ruta con el PSC si quiere su apoyo

BLANCA CIA, Barcelona

La historia se repite y el Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona vuelve a lanzar un ultimátum al alcalde, Xavier Trias, si quiere su apoyo para las ordenanzas y los presupuestos de 2013. El año pasado, el PP exigió la exclusividad de las negociaciones a CiU. Este año ha vuelto a plantear lo mismo —podría dar el sí a las ordenanzas y a los presupuestos— con otra condición: que Trias deshaga el acuerdo al que llegó con los socialistas que le facilitó aprobar el Plan de Actuación Municipal (PAM). Fue la abstención del PSC y los dos votos de Unitat per

Barcelona (UpB) lo que permitió a Trias aprobar el PAM. “Si alguien —en referencia a CiU— quiere aprobar algo con el PP, hay modelos de ciudad que son incompatibles”, afirmó Alberto Fernández Díaz, que, además, calificó de “humo” el pacto del PAM.

La pelota está en el tejado del alcalde, que deberá elegir estrategia, socio y calendario. De momento, no ha decidido. La segunda teniente de alcalde, Sònia Recasens, ha iniciado conversaciones a dos bandas y se reunió ayer con el PSC, por un lado, y con el PP, por otro. Con la misma finalidad: buscar in extremis el apoyo

para las ordenanzas fiscales —que tuvieron que ser retiradas de la orden del día del pleno del viernes pasado— y no verse obligada a prorrogarlas. Si quieren aprobarlas inicialmente se debería celebrar un pleno extraordinario la semana próxima. Recasens quiere aclarar el pacto de las ordenanzas —los ingresos por impuestos y tasas del año próximo— y, después, afrontar la negociación de los presupuestos. El PP no se opone a ajustarse a ese guion, pero dejando claro que una cosa llevará a la otra.

Los socialistas, en cambio, quieren afrontar las negociaciones de los presupuestos y el mar-

co económico del mandato a la vez y plantearon a Recasens entablar conversaciones “con más calma”, según precisa un edil socialista, y prorrogar las ordenanzas. Este escenario llevaría a la aprobación de los presupuestos probablemente en febrero, es decir, una vez aclarado el tablero resultante de las elecciones autonómicas. Y esto es algo que parece importar bastante al grupo municipal socialista y no tanto a Recasens —de Unió Democràtica— que el año pasado pactó cómodamente con el PP ordenanzas y presupuestos. Este pacto, de nuevo, vuelve a no agrandar a la parte convergente de la federación.